

Valdivia, diez de enero de dos mil veintidós.

VISTOS:

En rol de esta Corte N°273-2021, ha tenido lugar la vista del recurso de nulidad laboral formulado en contra de la sentencia definitiva de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, emanada del Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia, en virtud de la cual la magistrada titular, Sra. Inge Müller Méndez, en la parte resolutive de su fallo dispuso lo siguiente: *“1.- Se rechazan las excepciones de finiquito y renuncia, de cosa juzgada, de incompetencia y de prescripción opuestas, por las razones expuestas en los considerandos respectivos; 2.- Se acoge la demanda en el extremo que cobra indemnización por daño moral, condenándose a la demandada Sociedad Constructora Catalán Limitada, a pagar a los demandantes, todos ya individualizados, la suma de \$40.000.000.- (cuarenta millones de pesos) por concepto de daño moral; 3.- La suma ordenada pagar se reajustará de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, entre la fecha en que la sentencia quede ejecutoriada y la fecha de pago efectivo y devengará intereses corrientes para operaciones reajustables desde la mora; 4.- Que se rechaza la demanda interpuesta en contra de la empresa Aguas Décima S.A; 5.- No se condena en costas a la demandada Aguas Décima por no haber sido vencida en juicio y no se condena en costas a la demandada Sociedad Constructora Catalá Limitada por haber tenido motivo plausible para litigar.”*

Ha recurrido en contra del aludido dictamen jurisdiccional, en representación de la parte demandada Constructora Catalán Ltda., la abogada doña Ximena Águila Silva, quien ha esgrimido como causal única fundante de su recurso la del artículo 477 del Código del Trabajo, que en su planteamiento dividió en dos partes, a saber: la alegación principal referente a reputada infracción del artículo 12 del Código Civil, en relación con los artículos 60 y 177 del Código del Trabajo; mientras, en subsidio, prevaleciéndose del mismo capítulo de anulación, pero esta vez alusivo al artículo 1698 del Código Civil y artículo 69 de la Ley N°16.744. Su pretensión, en tanto, se ha encaminado a obtener que esta Corte

RTSLPV/FBB

invalide el mencionado fallo y dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, en la que se rechace en forma íntegra y con costas la demanda interpuesta en contra de su representada.

Verificada la audiencia de rigor ante esta sede en plataforma virtual, únicamente se presentó a alegar la letrada asesora de la demandada y actual recurrente, ya individualizada, tras cuya intervención avalando los términos de su presentación escrita, la causa quedó en estado de adoptar el acuerdo que a continuación se translitera.

OÍDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que bien sabido es que la causal invocada, esto es, la del mentado artículo 477 del Código del Trabajo, supone necesariamente que, en el juicio jurídico realizado por el tribunal con ocasión de la decisión del caso, se haya incurrido en un yerro con incidencia posible en una tríada de dimensiones: sea por una errónea interpretación legal, por falsa aplicación de ley, o por no aplicar la norma a un caso respecto del cual resultaba pertinente, debiendo tener especial cuidado en la observancia de la veda en la alteración de los hechos asentados en el fallo del grado, pues su establecimiento conforme a la prueba aportada a la causa y apreciada legalmente, sólo compete al tribunal de instancia, en respeto esencial al principio de inmediación que únicamente otorga centralidad en tal sentido al ente jurisdiccional ante quien las probanzas se rinden.

De lo anterior se sigue que, conforme al estricto tenor jurídico del motivo de nulidad esgrimido para ambas perspectivas subsidiarias de la misma causal que motiva el recurso, no es dable aspirar a la modificación de los presupuestos fácticos en el desarrollo argumental a que esta Corte se avoque en su decisión, de manera tal que el error que se denuncia en base al motivo de nulidad a examinar, sólo podrá entenderse cometido eventualmente con ocasión del referido juicio jurídico que efectuó el tribunal *a quo* al aplicar el derecho.

SEGUNDO: Que, a propósito del tópico principal del motivo de nulidad expuesto, se asila la recurrente en sostener que en la especie se habría verificado



una infracción al artículo 12 del Código Civil, en relación a los artículos 60 y 177, estos últimos del Código del Trabajo, al estimar, en suma, primeramente que a consecuencia de un avenimiento materializado en sede civil (rol C 818-2016 del Primer Juzgado Civil de Valdivia), en virtud del cual se efectuó el pago de un importe dinerario (\$25 millones) en favor de herederos del trabajador fallecido a causa del accidente del trabajo, que padeció en faenas de excavación para el reemplazo de un colector de aguas lluvia, sus efectos podían ser extrapolados a la instancia laboral, en el sentido de dar por íntegramente finalizadas también la totalidad de las implicancias del luctuoso hecho en este puntual ámbito contractual y, en segundo lugar, debiendo concluirse, a partir de la estipulación habida entre las partes en ese instrumento, que se renunció a las acciones propias de la sede especial que nos ocupa, erigiéndose como consecuencia que no ha podido la jueza del grado desestimar el finiquito que, en concepto general, ha operado en la especie respecto de los actores que han demandado daño moral.

TERCERO: Que, en dicho sentido, resulta ilustrativo para la adopción de la decisión requerida sobre este punto la transcripción del considerando noveno del fallo, que en lo pertinente expresa: *“Se rechazará la excepción de finiquito y renuncia en primer lugar porque el artículo 177 del Código del Trabajo no aplica al caso que nos convoca ya que parte de la base de que el trabajador esté vivo. En segundo lugar, porque además dicha norma es estricta en cuanto que deben cumplirse una serie de requisitos que tienen por objeto proteger el consentimiento libre del trabajador, requisitos que evidentemente no se han cumplido en la especie, en razón de lo cual, dicho finiquito y la citada renuncia, tal como la misma norma dispone, no puede ser invocado por el empleador. Por último, porque en sede civil no se hizo renuncia expresa a las acciones que derivan de los accidentes laborales lo que se desprende de la simple lectura de la citada clausula”* (sic).

De tal raciocinio se advierte que la sentenciadora ha efectuado un acertado abordaje de la situación concernida, desde que su criterio concuerda inclusive con el que se baraja a nivel administrativo por la Dirección del Trabajo, orientador a tal

RTSLPV/FBB

respecto, partiendo de la base de lo preceptuado precisamente en los artículos 60 y 177 del código del ramo, apuntando a que no es necesario el finiquito de un trabajador fallecido, considerando que el término de la relación laboral acaece producto de la propia muerte, en conformidad a la causal del numerando 3 del artículo 159 del texto legal del ramo, sosteniéndose que: *“Respecto del finiquito la Dirección del Trabajo ha señalado en Dictamen 2944/0138 de 02/08/2001, que no resulta jurídicamente procedente que el ex empleador de un trabajador fallecido exija de la o las personas que deban percibir el pago de las remuneraciones u otras prestaciones que a aquél se le hubieren quedado adeudando, la suscripción de un finiquito, toda vez que es un acto entre vivos que se celebra entre el empleador y el trabajador, calidad esta última que no tienen las personas anteriormente señaladas. Sin perjuicio de lo anterior, nada obsta a que el ex empleador del trabajador fallecido exija que las personas que recibirán el correspondiente pago suscriban un recibo u otro documento, en que conste el pago efectuado, con expresa declaración de las cantidades percibidas y los conceptos a que ellas corresponden.”* (Centro de Consultas de la página virtual de la Dirección del Trabajo, en lo concerniente a la pregunta: ¿Cómo se pone término al contrato de un trabajador fallecido?). Lo anterior, por lo demás, ha venido a ser suplementado por el Dictamen 4793/083, de 8 de noviembre de 2010, en torno a las prestaciones a solventar y a la forma de su entero.

CUARTO: Que, asimismo, de la simple lectura del libelo pretensor se desprende la errónea aspiración dirigida a que el referido avenimiento celebrado en sede civil pueda tener aplicación al ámbito laboral, a pesar que, como lo dice la jueza del *a quo*, no se cumplieron las formalidades descritas en el citado artículo 177, al encontrarse fallecido el trabajador, de manera que estuvo impedido de prestar su consentimiento, lo cual resulta de toda lógica, sin que modifique lo concluido la insatisfactoria explicación dada por la apoderada de la entidad demandada en sus alegaciones verbales, en el sentido de haberse referido a un finiquito en términos genéricos y no técnicos, pues ello se contradice no sólo con el tenor de la contestación de la demanda cuando se adujo la excepción de finiquito referida a aquél del precepto especial líneas atrás mencionado, sino que



es incongruente además hasta con el propio tenor de la causal que sirve de base al recurso, en la que puntualmente se prevale quien impugna de la supuesta infracción a los dos artículos concernidos en esta materia (artículos 60 y 177), incluyendo por ende al ya traído a colación y que es rector de tal instituto en el rubro laboral.

QUINTO: Que, enseguida, atina también la sentenciadora cuando en su interpretación limita los alcances de la tercera cláusula del avenimiento, que es una de estilo de renuncia, excluyendo en su concepto a *“las acciones que derivan de los accidentes laborales lo que se desprende de la simple lectura de la citada cláusula”* (sic), lo que tuvo por sustento el propio tenor expreso del mentado avenimiento, en que si bien constaba tal renuncia lo hacía en términos literales con referencia a las acciones civiles sin aducir explícitamente al ámbito laboral ni menos aún al de un accidente del trabajo; no pudiendo entender vulnerado el sentido del artículo 12 del Código Civil mediante tal inteligencia preceptiva, de suerte que, no obstante estar permitida la renuncia a esta clase de acciones de contenido patrimonial, tal dimisión no puede ser apreciada con amplitud en la medida que se traduce en la pérdida de derechos, sino que, muy por el contrario, ha de ser comprendida restrictivamente en protección de los mismos -máxime respecto de quienes representan a la parte económicamente más débil de lo que fuera otrora una relación laboral-.

Por último, al haberse constatado por la magistrada de la instancia, según dejó asentado en el considerando undécimo de su fallo, que las causas de pedir en el juicio civil rol C 818-2016 y en ésta de carácter laboral eran distintas, de suerte que en el primero lo había sido el ejercicio de las denominadas acciones de daño por repercusión de los familiares del occiso, mientras en el segundo, el daño moral directo padecido por la víctima, lo que, dicho sea de paso, le llevó a desestimar la excepción de cosa juzgada que fuera planteada por ambas demandadas, no puede venir ahora a pretenderse por quien recurre la extensión de los alcances del avenimiento y renuncia habidos en tal orden procesal diverso,

más aún si no fue objeto de impugnación alguna dicho aspecto de la decisión jurisdiccional.

SEXTO: Que en lo que incumbe ahora a la óptica subsidiaria de la misma causal del artículo 477 del Código del Trabajo, esta vez en vínculo con el artículo 1698 del Código Civil y artículo 69 de la Ley N°16.744, se ha manifestado reproche al parecer adoptado por la magistratura del grado, por haber acogido la demanda reputando que se hizo en base a haber presumido la existencia del daño moral, por errónea aplicación de la denominada doctrina del daño evidente, en circunstancias que se postula que debió estimarse, acorde a mayoritario criterio jurisprudencial y doctrinario, que era carga procesal de los actores acreditar sus presupuestos, lo que no se realizó al adolecerse en su criterio de probanzas que acreditaran esta específica clase de perjuicio solicitado.

SÉPTIMO: Que, para dirimir en torno al punto contenido en este acápite, con fundamento en el escrutinio del libelo del recurso y teniendo presente además, en lo afín, el texto de la sentencia puesta en cuestión, se desprende que se dieron por establecidos los hechos desde el considerando décimo sexto en adelante, entre los cuales, en lo que interesa a la recurrente, se tuvo por acreditada la muerte del trabajador en contexto de un accidente del trabajo, dejando asentado también que la demandada incumplió con las medidas tendientes al desempeño del trabajador en un contexto de seguridad, transgrediendo así el empleador su deber correlativo, debiendo una vez más recordar la inmutabilidad de tales asentamientos fácticos, pues de lo contrario debió preferirse el empleo de otro orden de causales que pudieran atacar el proceso de construcción de las conclusiones a las que se arribó, pero que, al no haberlo hecho, queda impedido todo pronunciamiento de esta Corte acerca de dicha materia.

OCTAVO: Que, por otra parte, para refutar lo aseverado por la recurrente, se vislumbra que el considerando vigésimo se ocupó de modo acucioso no sólo de definir los contornos del daño moral, sino también de precisar el material probatorio con que éste quedaba demostrado, al indicar: *“El daño moral, se ha definido como el pesar, dolor, angustia o molestias que sufre una persona en su*



sensibilidad física o en sus sentimientos, creencias o afectos, que lesiona el espíritu y que se manifiesta en pesadumbre y depresiones de ánimo. Tal daño, de naturaleza eminentemente subjetiva, ocurrido como consecuencia de un accidente del trabajo como el que nos convoca, es indemnizable conforme lo dispone el artículo 69 de la Ley 16.744, que dispone en lo pertinente que cuando el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de la entidad empleadora, sin perjuicio de las acciones criminales que procedan, la víctima podrá reclamar al empleador, también las otras indemnizaciones a que tenga derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral. Un vez acreditado el daño su regulación es entregada el juez de la causa de acuerdo a la equidad y prudencia.”

Detallando los medios de convicción aparejados al juicio en materia del daño moral demandado, agrega luego la sentenciadora: *“Para determinar si efectivamente el demandante sufrió daño moral en los términos expuestos habrá que determinarse si sobrevivió dicho trabajador al accidente que en este fallo nos convoca y en qué condiciones. El informe de autopsia de don Erick Burgos, señala que al examen del cuerpo se pudo constatar que se aprecia un área un área de infiltración hemorrágica en región temporal izquierda de aproximadamente 6 por 7 centímetros al corte izquierdo infiltrado, una fractura desplazada de clavícula derecha con gran infiltración hemorrágica de la zona, se aprecia sección parcial de la arteria subclavia, fractura de arco costal N°3 derecho con su respectiva infiltración hemorrágica y concluye el citado informe que la causa de muerte es asfixia por sofocación. El informe técnico elaborado por Ibett Gaete Moreno, consultor en prevención de riesgos, señala que “capataz da la señal a operador de excavadora que suba el balde de su máquina para poder sacar a don Carlos Villablanca y al percatarse que no logra ver a don Erick Burgos, salta a la excavación en compañía del operador de la retroexcavadora y dos jornales más con pala en la mano para liberarlo, pasado 10 minutos logran sacarlo y subirlo a escalera otorgando los primeros auxilios correspondientes, luego fue entregado a personal de emergencia SAPU, e ingresado a hospital base de Valdivia, pasado treinta minutos de reanimación declaran su defunción.” El informe de la Mutual de*



Seguridad y el certificado de defunción indican que la causa de muerte asfixia por sofocación. El informe de Policía de Investigaciones N° 41 de 25 de enero del año 2015 concluye en lo pertinente que “conforme a la inspección ocular del sitio del suceso y el empadronamiento policial correspondiente, el fallecido se encontraba trabajando en una obra donde se efectuaba excavación para el cambio de tuberías, descendiendo a ésta antes de completar la instalación de la estructura que impide que la tierra de la fosa se derrumbe, por lo cual se produjo un desprendimiento de la tierra de las paredes de la excavación, cubriendo completamente a Erick Burgos Arriagada, quien fue asistido por sus compañeros de trabajo y posteriormente por personal del Samu, siendo trasladado hasta el Hospital Base de Valdivia donde finalmente falleció.” El informe de atención de urgencia del Hospital Base, indica entre otras cosas que el paciente ingresa con paro cardiorespiratorio, politraumatizado y con sofocación por barro, ingresa a las 14,10 horas y a las 14,35 se constata su fallecimiento. En el parte de carabineros de fecha 14 de noviembre del año dos mil quince, mismo día del accidente, se señala que ante el llamado de Cenco se concurre al lugar del accidente, se piden instrucciones al fiscal de turno, se resguarda el sitio del suceso en espera de la Brigada de Homicidio de la PDI, se toma declaración a un testigo que se encontraban en el lugar, don Roberto Zapata Rodríguez, luego se traslada a las oficinas de la Constructora Catalán en donde le toma declaración a la Administradora doña Sandra Aburto Romero, se empadronó a doña Romina Benavides Gatica y posteriormente en el hospital se empadronó a don Juan Catalán Mora. Señala además que tanto don Roberto Zapata como doña Sandra Aburto, declararon que el accidente se produjo a las 13,30 horas y que en el Hospital se constató “que el trabajador malogrado” era don Erick Burgos, “quien ingresó al servicio de urgencia a las 14,13 horas, finalizando las maniobras de reanimación a las 14,31 horas en que fue declarado muerto por el doctor Eduardo Gómez López, según folio 2654308, en que refiere sólo hematoma occipitoparietal izquierda, politraumatizado, sofocación por aplastamiento, paro cardiorrespiratorio”. Tales probanzas a juicio de esta Magistrado, permiten tener por acreditado que el trabajador don Erick Burgos, se accidentó a las 13,30 horas

RTSLPV/FBB



aproximadamente, constatándose su fallecimiento a las 14,35 horas, lo cual permite presumir que dicho trabajador sobrevivió al accidente, a lo menos algunos momentos, para fallecer momentos después, fallecimiento que fue constatado en el hospital. En efecto, dicha muerte no es inmediata sino que por asfixia por sofocación, y sin duda, de acuerdo a la dinámica del accidente, le produjo un daño moral, por cuanto el trabajador se dio cuenta de que fue aplastado por una avalancha de barro que lo sepultó, que no le permitió realizar ninguna maniobra para poder escapar y que le impidió respirar producto de lo cual muere por asfixia por sofocación. Además sufrió el dolor físico por el aplastamiento, y por la fractura de la clavícula y de la costilla, dolor que también genera una afección psicológica. El daño moral es evidente, y cualquier persona en la situación del trabajador lo hubiese sufrido también, por cuanto la muerte no fue inmediata sino que luego de la agonía y de representarse su muerte y de no poder hacer nada para evitarlo. En este punto, no se considerarán las declaraciones de los testigos de las demandadas por no tener mayor expertiz en cuanto a determinar sobre el momento de fallecimiento de don Erick Burgos, por no ser concluyentes, y principalmente por ser o haber sido dependientes de las demandadas que tienen con claro interés en los resultados del juicio, como por ejemplo la declaración de don Carlos Águila Álvarez, capataz que dio la orden de bajar a la excavación sin entibación, como se ha tenido por acreditado con los informes y declaraciones prestadas por escrito en la causa civil; o de don Carlos Villablanca Montes que bajó junto a don Erick Burgos al fondo de la excavación y que según las probanzas rendidas en la causa civil no solo sindicó al capataz como el responsable de dar la orden de bajar a la excavación sino que además se opone inicialmente a dicha orden fue el capataz, circunstancias que al declarar en esta causa omite completamente; o las declaraciones de doña Sandra Aburto, que era la administradora de la obra al momento del accidente. Tales antecedentes, permiten a esta sentenciadora avaluar el daño moral experimentado por el actor a consecuencia del accidente y sus secuelas, en la suma de \$40.000.000 (cuarenta millones de pesos) suma que deberá reajustarse, de acuerdo con la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, fijado por el Instituto Nacional de

RTSLPV/FBB

Estadísticas u organismo que haga sus veces, entre la fecha en que el fallo se encuentre ejecutoriado y hasta el día de su pago efectivo, con los intereses corrientes para operaciones reajustables que correspondan a contar del día en que los obligados al pago se constituyan en mora y hasta su pago efectivo. Por lo expuesto y razonado se acogerá la demanda en este extremo.”

NOVENO: Que del lato reporte textual del fallo que antecede, no resulta dable deprender que la juzgadora hubiese incurrido en la denunciada infracción al artículo 1698 del Código Civil en relación al 69 de la Ley N°16.744, ya que, por el contrario, la parte demandante probó la existencia del daño moral susceptible de reclamo en sede laboral, según el completo análisis consignado, lo que se encuentra profusamente recogido en los párrafos apuntados, por lo que tampoco se divisa concurrente la infracción expuesta con miras a ver aparejada la nulidad de la decisión jurisdiccional.

DÉCIMO: Que, así las cosas, no se aprecia que haya existido la errónea aplicación del derecho que se acusa, sino que se avizora, en realidad, que la pretensión de la recurrente por esta vía ha sido la de conseguir la alteración de las conclusiones de hecho a que arribó el tribunal en su proceso de ponderación de la prueba rendida; pero por la forma de labrar la pretendida infracción legal, sin precisar cuál de la tríada de modalidades concurre ni de qué forma, se torna inviable colegir concurrente la deficiencia jurídica invocada, habiendo procurado enmarcarla erróneamente en un aspecto del ejercicio jurisdiccional de la facultad de apreciación probatoria, lo que es propio de un recurso de instancia, mas no de éste de carácter jurídico restrictivo.

En otro extremo, si se aspiraba en verdad a la posible mutación de las bases fácticas que constaban en la sentencia impugnada, tal como se adelantó, debió optarse por una causal diversa a la escogida, que residiera en un franco cuestionamiento del proceso de edificación del razonamiento y ponderación de la prueba acorde a las reglas de la sana crítica, lo cual no se efectuó.

UNDÉCIMO: Que, por lo dicho, fluye a título de colofón que al no haberse observado en la dictación de la sentencia evidencia alguna de los déficit de derecho que el recurso de nulidad le atribuye, el presente arbitrio de nulidad deberá ser desestimado en la parte resolutive, siendo ejercicio estéril, por ende, pronunciarse acerca del modo cómo ello pudo tener influencia sustancial en lo dispositivo de la misma.

A la luz de lo expuesto, normas legales citadas, más lo dispuesto en los artículos 477, 478 y 482 del Código de Trabajo, **se RECHAZA, sin costas**, el recurso de nulidad interpuesto por la abogada, doña Ximena Águila Silva, en representación de la parte demandada Constructora Catalán Ltda., en contra de la sentencia definitiva dictada el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, por doña Inge Müller Méndez, Jueza Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia; la que, en consecuencia, **NO ES NULA**.

Redacción del Ministro Titular, señor Luis Moisés Aedo Mora.

Regístrese e incorpórese en su oportunidad en la carpeta digital.

ROL N°273-2021 – LABORAL



Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Valdivia integrada por Ministro Luis Moises Aedo M., Ministra Suplente Cecilia Margarita De L Samur C. y Abogado Integrante Luis Felipe Alfonso Galdames B. Valdivia, diez de enero de dos mil veintidós.

En Valdivia, a diez de enero de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.